

This is the **published version** of the master thesis:

Ariza Arévalo, Francisco Javier; Abat i Ninet, Antoni (tut.). *La Directiva (UE) 2024/1760 y la diligencia debida en materia de sostenibilidad : retos y oportunidades para las empresas andaluzas*. (Universitat Autònoma de Barcelona), 2025

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/323890>

under the terms of the  license.



**MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INTEGRACIÓN EUROPEA**

Curso 2024-2025

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

***La Directiva (UE) 2024/1760 y la diligencia debida en
materia de sostenibilidad:
Retos y oportunidades para las empresas andaluzas***

AUTOR: FRANCISCO JAVIER ARIZA ARÉVALO

TUTOR: DR. ANTONI ABAT NINET

Campus de la UAB, 20 de junio de 2025

RESUM

Aquest treball analitza l'impacte de la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligència deguda en matèria de sostenibilitat i drets humans en el teixit empresarial andalús. Mitjançant una revisió bibliogràfica i un anàlisi DAFO, s'identifiquen reptes i oportunitats per a les empreses, especialment les pimes. Es proposen estratègies per facilitar l'adaptació progressiva i fer d'aquesta normativa una eina transformadora i inclusiva.

RESUMEN

Este trabajo analiza el impacto de la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida en sostenibilidad y derechos humanos en las empresas andaluzas. A través de una revisión bibliográfica y un análisis DAFO, se identifican retos y oportunidades. Se proponen estrategias para que las pymes integren progresivamente estas obligaciones, con el fin de favorecer una transición justa e inclusiva hacia la sostenibilidad.

ABSTRACT

This thesis analyzes the impact of Directive (EU) 2024/1760 on corporate due diligence in sustainability and human rights in Andalusia. Through a literature review and SWOT analysis, it identifies the challenges and opportunities for businesses, especially SMEs. It proposes strategies for their progressive adaptation, aiming at a sustainable and inclusive economic transformation in the region.

PARAULES CLAU: Diligència deguda, sostenibilitat, empreses andaluses, Unió Europea.

PALABRAS CLAVES: Diligencia debida, sostenibilidad, empresas andaluzas, Unión Europea.

KEYWORDS: Due diligence, sustainability, Andalusian companies, European Union.

AGRADECIMIENTOS

A todos aquellos andaluces que dejaron su tierra y emigraron a Cataluña buscando un futuro mejor. Este trabajo es, en parte, fruto de ese legado invisible de trabajo, sacrificio y esperanza con el que tantas familias, también la mía, vivieron la diáspora andaluza cuando aún no estábamos a cuatro horas en tren de distancia.

Hoy hago el camino inverso volviendo a Andalucía, teniendo siempre en mente a aquellos que no pudieron hacerlo.

A mis compañeros y compañeras de máster, por las conversaciones, las risas y la complicidad. Sin vosotros, este camino no habría sido el mismo.

Y, finalmente, a Andalucía y a Cataluña, por permitirme pensar con acento del sur y escribir con mirada europea.

ÍNDICE

Capítulo I. INTRODUCCIÓN	5
1. SOBRE LA DIRECTIVA 2024/1760 Y LAS EMPRESAS DE ANDALUCÍA.....	5
2. OBJETIVOS	6
3. METODOLOGÍA.....	6
Capítulo II. MARCO TEÓRICO	8
1. SOBRE LA DILIGENCIA DEBIDA	8
1.1. ASPECTOS INNOVADORES DE LA DILIGENCIA DEBIDA EN EL CONTEXTO	
NORMATIVO COMUNITARIO	8
1.2. EXPERIENCIAS LEGISLATIVAS PREVIAS	9
1.2.1. Alemania.....	10
1.2.2. Francia.....	10
2. EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA Y LAS EMPRESAS EN LA DIRECTIVA	
2024/1076	11
2.1. LA APLICABILIDAD DE LA DIRECTIVA	12
2.1.1. El término empresa en la Directiva 2024/1760	12
2.1.2. Ámbito de aplicación.....	12
2.1.3. Implantación de la directiva	13
2.2. OBLIGACIONES CLAVE DE LAS EMPRESAS	14
2.2.1. Procedimiento de implantación de la diligencia debida.....	15
2.2.2. Responsabilidad de las empresas y sanciones asociadas.....	18
3. RESPECTO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y LA DIRECTIVA 2024/1076	19
3.1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL DE ANDALUCÍA	19
3.1.1. La estructura sectorial de la economía andaluza	19
3.1.2. El tejido empresarial andaluz.....	20
3.2. APLICABILIDAD DE LA DIRECTIVA Y LAS EMPRESAS EN ANDALUCÍA	21
3.3. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ANDALUZAS.....	23
3.3.1. Análisis DAFO de la Directiva 2024/1760 en el contexto andaluz	23
Capítulo III. CONSIDERACIONES FINALES	26
1. LAS PYMES Y LA DILIGENCIA DEBIDA	26
2. CONCLUSIÓN	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	29

Capítulo I. INTRODUCCIÓN

1. SOBRE LA DIRECTIVA 2024/1760 Y LAS EMPRESAS DE ANDALUCÍA

La diligencia debida o *due diligence* en materia de sostenibilidad y derechos humanos ha adquirido una importancia creciente en el ámbito de regulación europeo, especialmente con la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2024/1760, el pasado mes de junio de 2024. Esta normativa establece obligaciones para las empresas en la identificación, prevención y mitigación de impactos negativos en sus cadenas de valor, reforzando la responsabilidad empresarial en cuestiones sociales y medioambientales. La futura transposición de la Directiva en los Estados miembros de la Unión Europea genera un marco de incertidumbre y oportunidad para el tejido empresarial, particularmente en el presente Trabajo Final de Máster se hará una especial referencia para las empresas que ejercen su labor comercial en la comunidad autónoma de Andalucía (España), de forma que se analizará cómo deben adaptarse a estos nuevos requerimientos normativos y cuáles son los retos y las oportunidades de esta nueva legislación. El presente trabajo se presenta como una “guía práctica” para que todas aquellas empresas, obligadas o no a esta nueva legislación, puedan conocer de forma sencilla y concisa todos aquellos pasos a dar para modificar sus acciones y hacer compatible su cultura empresarial con la Directiva.

El análisis de cómo este nuevo marco normativo impactará en el contexto regional antes de su implementación efectiva busca acercar el Derecho de la Unión Europea a la realidad cotidiana de los territorios europeos. En la actualidad, y previo a la aprobación de esta normativa europea, se han encontrado estudios y debates en torno a la diligencia debida, sin embargo la falta de investigaciones centradas en su repercusión en empresas en regiones específicas como Andalucía, donde no hay tantas empresas de gran tamaño, unido a la evaluación de retos y oportunidades concreto de una región eminentemente agrícola y dependiente del turismo, permite vislumbrar la aplicación de normativa europea en un contexto más cercano a la realidad de muchos europeos que no viven en grandes metrópolis. Considerando el impacto potencial de la directiva en el entorno empresarial regional, y con el objetivo de anticipar sus implicaciones prácticas, este trabajo parte de la siguiente hipótesis de investigación:

“La Directiva 2024/1760, pese a las dificultades iniciales, puede convertirse en una oportunidad estratégica para transformar la cultura empresarial andaluza hacia prácticas más responsables y sostenibles.”

Es importante tener en cuenta que la normativa aún no ha sido transpuesta a la legislación nacional, por lo que se busca realizar un acercamiento teórico a la preparación del sector empresarial andaluz. Asimismo, el estudio de la jurisprudencia española y europea previa a la aprobación de la Directiva permitirá comprender cómo se ha venido aplicando el concepto de diligencia debida en distintos contextos, proporcionando una base para futuras adaptaciones regulatorias.

La conexión entre el derecho público y el derecho medioambiental en la UE contribuye al debate sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad, ofreciendo un análisis para próximos estudios en gobernanza empresarial y estrategias de cumplimiento normativo que sirvan como referencia para futuras investigaciones sobre la transposición de normativas europeas relativas a derecho medioambiental. De esta forma, también, se

planteará en el presente trabajo la evolución del marco normativo europeo hacia una mayor responsabilidad empresarial en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, partiendo de los principios de Ruggie (2011) y de la Guía para una conducta empresarial responsable de la OCDE (2018) hasta llegar a la Directiva de diligencia debida. En este punto cabe enunciar la pregunta que guiará esta investigación: *¿Qué retos y oportunidades trae consigo la diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos para las empresas andaluzas?*

2. OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como objetivo general evaluar los retos y las oportunidades que comporta la diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos en las empresas andaluza.

Para alcanzar este propósito, se han establecido tres objetivos específicos:

1. El primero buscará examinar el marco normativo y los principios fundamentales de la diligencia debida en sostenibilidad y derechos humanos, con especial atención a la Directiva (UE) 2024/1760.
2. El segundo objetivo específico será analizar la jurisprudencia previa a la aprobación de esta normativa, con el fin de comprender la evolución del concepto y su aplicación en distintos contextos. A través del estudio de casos previos se buscará identificar tendencias judiciales y cómo los tribunales han interpretado y aplicado los principios relacionados con la sostenibilidad y los derechos humanos en el ámbito empresarial. Este análisis ayuda a contextualizar la nueva normativa, entender las implicaciones de su implementación y prever cómo será recibida por los actores clave, como las empresas, las autoridades judiciales y los legisladores.
3. El tercer objetivo radica en diseñar propuestas estratégicas para que las empresas andaluzas, especialmente las pymes, integren progresivamente la diligencia debida en sus prácticas empresariales, anticipándose a futuros escenarios regulatorios europeos. Este objetivo busca aportar una dimensión propositiva de prospectiva transformadora al Trabajo de Fin de Máster, ofreciendo estrategias viables y adaptadas al contexto empresarial andaluz para la integración progresiva de la diligencia debida en sostenibilidad y derechos humanos.

A través de estos objetivos, se busca proporcionar un análisis integral sobre la situación actual y los efectos que la normativa podría generar en el ámbito empresarial regional andaluz, contribuyendo a la comprensión de los cambios regulatorios y su impacto en la sostenibilidad y los derechos humanos.

3. METODOLOGÍA

El presente trabajo adopta una metodología cualitativa basada en una revisión bibliográfica no sistemática. Esta elección responde a la voluntad de explorar un fenómeno jurídico y socioeconómico emergente, la diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos, desde una perspectiva comprensiva y contextual, atendiendo a la diversidad de fuentes doctrinales, normativas, jurisprudenciales y de análisis institucional relevantes. El carácter no sistemático de la revisión permite mayor flexibilidad en la selección y análisis de los materiales consultados, integrando tanto literatura académica especializada como informes institucionales, documentos normativos de la Unión Europea y legislación

comparada, con especial atención a los casos de Alemania y Francia como antecedentes normativos clave.

La revisión bibliográfica se ha estructurado en torno a tres ejes fundamentales: el desarrollo normativo y jurisprudencial de la diligencia debida en el contexto de la Unión Europea; la aplicabilidad práctica de la Directiva 2024/1760 al tejido empresarial andaluz; y la identificación de retos y oportunidades derivados de su implementación futura en el ámbito local. Esta revisión ha sido indispensable para construir un marco teórico sólido que sirva como base para el análisis estratégico desarrollado posteriormente.

En este sentido, se ha incorporado como herramienta metodológica el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), ampliamente utilizado en el ámbito de la planificación estratégica. Aunque su origen se sitúa en el mundo empresarial estadounidense de la década de 1960, su eficacia para identificar factores clave internos y externos ha favorecido su extensión a otros campos como la administración pública y la evaluación de políticas y programas (Hill et al., 1997). El uso del análisis DAFO en este trabajo se justifica por su capacidad de integrar dimensiones múltiples del contexto andaluz, económicas, sociales, normativas y territoriales, en una estructura comprensible y orientada a la toma de decisiones estratégicas. Tal y como destaca Fuertes et al. (2021) el DAFO no es solo una herramienta descriptiva, sino una metodología propia del pensamiento estratégico que permite confrontar factores internos y externos para diseñar líneas de acción adaptadas al entorno.

Este enfoque metodológico no pretende ofrecer resultados cuantificables, sino una aproximación interpretativa y propositiva, orientada a comprender el impacto potencial de la Directiva en una región como Andalucía y a generar propuestas estratégicas que contribuyan a facilitar su aplicación, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas, protagonistas del tejido productivo regional.

Asimismo, cabe destacar que la originalidad del presente trabajo radica principalmente en la manera en la que se ha abordado tanto el análisis jurídico y doctrinal de la directiva, aun escasamente desarrollado por la literatura académica, como su aplicabilidad concreta al contexto regional, donde apenas existen estudios sobre su impacto potencial. Esta doble perspectiva, teórica y práctica con un enfoque territorial supone la introducción de elementos innovadores en la forma en la que se aborda el debate sobre la transposición de normativas europeas. Además, la dimensión prospectiva del estudio no responde a un ejercicio de futurología especulativa, sino que se fundamenta en literatura científica contrastada, marcos normativos comparados y herramientas analíticas consolidadas. Esto garantiza la solvencia del diagnóstico y de las propuestas formuladas, dotando al trabajo de un valor añadido tanto para la investigación académica como para el diseño de políticas públicas y estrategias empresariales sostenibles

Capítulo II. MARCO TEÓRICO

1. SOBRE LA DILIGENCIA DEBIDA

La diligencia debida es un término que nació lejos del ámbito medioambiental y de los derechos humanos (Guamán, 2022). Surgió como práctica empresarial orientada a la evaluación de riesgos empresariales en los ámbitos financiero y comercial (Martín-Ortega, 2014). Las reacciones ineficaces enmarcadas dentro del concepto de responsabilidad social corporativa de la empresa han puesto de manifiesto el alza de las prácticas abusivas de las grandes corporaciones, lo que ha producido un aumento de la presión social hacia el legislador provocando un cambio en los marcos normativos nacionales e internacionales (Gorelli, 2025). En el contexto europeo y con el objetivo de aplicar este mecanismo en la protección del medioambiente y los derechos humanos las instituciones de la UE, en la redacción de la nueva normativa, utilizó las directrices de la “*Guía para una conducta empresarial responsable*” de la OCDE. De forma este término queda definido como:

Un conjunto de procesos interrelacionados para identificar los impactos negativos, prevenirlos y mitigarlos, realizar un seguimiento de la implementación y los resultados e informar sobre cómo se abordan los impactos negativos con respecto a las actividades propias de las empresas, sus cadenas de suministro y demás relaciones comerciales (OCDE, 2018, pp.21).

Asimismo, es importante el énfasis que se hace en la definición sobre la multiplicidad de procesos que engloban esta actividad. Se establece una proporcionalidad respecto al riesgo a la hora de ejecutar la diligencia debida, es decir, se priorizan los impactos más graves, además se acentúa el hecho de la posible casuística que pueda surgir en cada caso particular, por lo que existe una concepción dinámica. La comunicación entre las distintas partes afectadas cubre una parte importante en la guía de la OCDE, quedando marcada por un compromiso mutuo para el desarrollo de las medidas de mitigación de riesgos mediante el diálogo constante entre las distintas partes implicadas.

Esta evaluación de los efectos adversos de las empresas, en el contexto de la legislación europea, busca eliminar una de las bases más claras del comercio internacional en el mundo globalizado actual, asentado en el modelo de la ventaja comparativa. Las operaciones de las empresas transnacionales, bajo esta máxima, han propiciado que las cadenas de suministro vayan desde los países más desarrollados a otros que no lo son tanto, en donde el coste de la mano de obra, de producción o los parámetros del derecho medioambiental son más difusos (Ortíz-Arce, 2024). Esto hace que la expansión y diversificación de las cadenas complique, por sí misma, la vinculación entre las posibles violaciones de derechos humanos o medioambientales en algún eslabón, lo que dificulta poder establecer cualquier tipo de responsabilidad en la empresa matriz. De hecho, la estructura compleja de las empresas transnacionales busca, en parte, diluir dicha responsabilidad (Guamán, 2022).

1.1. ASPECTOS INNOVADORES DE LA DILIGENCIA DEBIDA EN EL CONTEXTO NORMATIVO COMUNITARIO

El aspecto innovador mediante el cual el Derecho de la Unión Europea trata el término de diligencia debida radica en dos factores principalmente: la responsabilidad de la empresa matriz con la filial y la responsabilidad en materia de sostenibilidad. A estos dos factores se une la máxima comunitaria de preservar los derechos humanos.

Respecto al principio de responsabilidad de las empresas matrices sobre el comportamiento de alguna de sus filiales la Comisión Europea en la redacción de la directiva ha seguido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta desprende que puede ser imputable a la matriz los incumplimientos que realice la empresa filial. En la sentencia de 6 de octubre de 2021, asunto C-882/19 ¹, el TJUE refuerza este principio al reconocer que las matrices no pueden eludir su responsabilidad a través de estructuras corporativas fragmentadas, para ello el tribunal apela, en el apartado 31 de la sentencia, a la “unidad económica” existente entre la matriz y la filial. Este argumento jurídico es base para que las empresas matrices tengan cumplir con los incumplimientos de sus empresas subsidiarias al existir una única unidad de comportamiento de mercado y por lo tanto sean tratadas como una única empresa, en el sentido del artículo 101 del TFUE, aunque haya una división formal entre ambas como resultado de una personalidad jurídica distinta.

En cuanto a la responsabilidad de las empresas por tener una diligencia debida en materia medioambiental, hay tribunales que ya se han pronunciado sobre este tema, sirviendo de precedente para codificar normativamente este principio en la reglamentación europea. La sentencia C/09/571932 / HA ZA 19-379, de 26 de mayo de 2021 del Tribunal de Distrito de La Haya (Países Bajos)². Este tribunal validó el argumento de los demandantes al reconocer que Shell tenía deber de diligencia, debido a la responsabilidad legal y moral para reducir sus emisiones de carbono, puesto que de lo contrario incurrirían en una inacción que afecta a derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a un medio ambiente saludable. Esta decisión reforzó el principio de que las empresas no pueden escudarse únicamente en el cumplimiento de normativas nacionales laxas si sus actividades contribuyen a un aumento de la contaminación. Este fallo marcó un hito en la jurisprudencia internacional al ser la primera vez que una empresa petrolera era condenada judicialmente por no reducir sus emisiones de carbono en línea con los objetivos climáticos globales. En este sentido, lo más innovador de esta sentencia, sirviendo de inspiración para la redacción de esta normativa, es la idea de que las empresas tienen deberes vinculantes en materia ambiental, además de un deber de anticipación en el que la rendición de cuentas en sostenibilidad será una exigencia legal y no solo un compromiso voluntario.

La dimensión normativa sobre derechos humanos parte de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos aprobados en el año 2011 en el seno de las Naciones Unidas. Guaman (2022) destacaba la importancia de impregnar la nueva directiva con esta connotación sobre la protección de los derechos humanos, puesto que este mecanismo se presenta como el punto de acuerdo entre patronal, sindicatos y sociedad civil respecto a la responsabilidad que el mundo empresarial debe de tener en su hacer respecto a la preservación de los derechos humanos.

1.2. EXPERIENCIAS LEGISLATIVAS PREVIAS

La construcción normativa de esta directiva en torno a la jurisprudencia comentada, y todas aquellas en las que basan los hechos juzgados de las mismas, se conjuga con las experiencias legislativas previas en materia de diligencia debida medioambiental y de derechos humanos en países comunitarios como Alemania y Francia. Antes de abordar las

¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2021, Sumal, S. L. contra Mercedes Benz Trucks España, S.L., Asunto C-882/19, ECLI:EU:C:2021:800.

² Sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya de 21 de mayo de 2021, Caso Milieudefensie et al. contra Royal Dutch Shell, C/09/571932 / HA ZA 19-379. Disponible en https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2021/20210526_8918_judgment-2.pdf, consultado el 13 de marzo de 2025

experiencias legislativas previas se hace necesario advertir que no debe asumirse una analogía incondicional entre estas normativas nacionales y la Directiva. Si bien ambas legislaciones han servido de inspiración parcial para la elaboración del nuevo marco normativo europeo, sus estructuras jurídicas, alcances y contextos de aplicación responden a realidades diferentes. Las experiencias legislativas nacionales deben ser entendidas dentro de su propio marco de aplicación y no como modelos automáticamente extrapolables a la normativa europea. Por tanto, su análisis debe realizarse con cautela, como referencia comparada y no como patrón normativo vinculante o directamente trasladable al caso andaluz ni al marco comunitario en su conjunto.

1.2.1. Alemania

La ley Alemana de Debida Diligencia en Cadenas de Suministro (*Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz* – LkSG) fue aprobada en el año 2021 y entró en vigor en el año 2023. Su propósito es prevenir y mitigar riesgos ambientales y sociales derivados de sus operaciones, incluyendo aquellas de sus proveedores directos e indirectos, tanto en Alemania como en el extranjero. La aplicabilidad de esta norma se diseñó para empresas con más de 3.000 empleados, este umbral se redujo hasta los 1.000 en 2024. Exige la implementación de un sistema de gestión de riesgos, la designación de un responsable del cumplimiento normativo y la realización de análisis anuales para identificar amenazas a los derechos humanos o al medio ambiente. Asimismo, impone la adopción de medidas preventivas y correctivas, la creación de un mecanismo de denuncia y la publicación de informes anuales sobre el cumplimiento de las disposiciones. En el ámbito ambiental, la LkSG prohíbe actividades como la contaminación del agua y el aire, la deforestación y los desalojos forzados, alineándose con tratados internacionales como el Convenio de Minamata sobre el mercurio, el Convenio de Basilea sobre desechos peligrosos y el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Además, reconoce la importancia del acceso a recursos naturales y la protección de comunidades afectadas. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en multas de hasta 50 millones de euros, sanciones administrativas y restricciones comerciales. La ley también permite que sindicatos u ONGs presenten denuncias en nombre de personas afectadas (Velasco, 2024).

1.2.2. Francia

La Ley Francesa sobre el Deber de Vigilancia (*Loi sur le devoir de vigilance*), fue aprobada en marzo de 2017, establece la obligación legal de las grandes empresas de prevenir violaciones de derechos humanos y daños ambientales dentro de sus propias operaciones y en las de sus filiales, subcontratistas y proveedores con los que mantengan relaciones comerciales consolidadas. Esta normativa es aplicable a todas las empresas con más de 5.000 empleados en Francia o 10.000 empleados a nivel global. Abarca sectores como el textil, la minería y la energía, donde hay mayor riesgo de abusos. La prevención de violaciones de derecho humanos y daños medioambientales se lleva a cabo mediante plan de vigilancia. Este plan debe comenzar con un mapeo de riesgos, donde la empresa identifica y analiza las posibles vulneraciones que podrían surgir en sus actividades o en las de sus filiales, subcontratistas y proveedores. A partir de este análisis, se deben realizar evaluaciones periódicas, lo que implica revisar de manera continua la situación de estos actores para detectar cualquier señal de riesgo y garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos y sostenibilidad. Además, la ley exige la adopción de acciones preventivas para evitar que se materialicen perjuicios graves. Estas medidas pueden incluir cambios en los procesos de producción, capacitaciones para los empleados

y mejoras en los protocolos internos de supervisión. Para asegurar que cualquier irregularidad pueda ser detectada y abordada a tiempo, las empresas deben establecer mecanismos de denuncia accesibles tanto para sus trabajadores como para terceros, como comunidades afectadas, organizaciones de derechos humanos y sindicatos. Asimismo, el plan de vigilancia debe contar con un sistema de seguimiento y evaluación. En el caso en el que una empresa no cumpla con sus obligaciones, cualquier parte interesada (sindicatos, ONGs o afectados) puede demandarla, lo que puede desembocar en sanciones económicas (ECCJ, 2017).

2. EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA Y LAS EMPRESAS EN LA DIRECTIVA 2024/1076

La Unión Europea ha desempeñado internacionalmente un papel fundamental en la regulación de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial, puesto que es la primera institución que ha pasado de un marco orientativo a uno vinculante jurídicamente en lo que respecta a la diligencia (Domínguez et. al, 2024). En este contexto, la Directiva 2024/1076 representa un avance significativo en la consolidación de la diligencia debida en materia de derechos humanos y sostenibilidad dentro de la actividad económica.

En lo referido a la relación entre la UE y las empresas en materia de sostenibilidad y derechos humanos esta directiva marca de forma clara la dirección, Durán Ayago (2022) comenta el cambio de enfoque desde el año 2017 con la aprobación de la norma francesa, comentada con anterioridad. Aunque el momento en el que este tema saltó a la opinión pública comunitaria se podría establecer en el año 2013, según Domínguez et al. (2024) con el derrumbe del edificio Rana Plaza en la ciudad de Dhaka en Bangladés. En este incidente 1.135 personas perdieron la vida y más de 2.500 resultaron heridas, la mayoría de estas personas trabajan en fábricas textiles localizadas en el presente edificio. Estas fábricas eran parte de la cadena de suministro de grandes empresas multinacionales con sede en occidente.

El sustento jurídico de esta normativa es dual, es decir, su base jurídica es doble y radica en los artículos 50 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Respecto al artículo 50 se hacen servir los apartados 1 y el 2 letra “g”, la competencia de este artículo recae en el derecho de establecimiento de las empresas, permitiendo a la UE garantizar que las normas nacionales sobre la constitución y el funcionamiento de las empresas no obstaculicen la libre circulación de servicios y capitales dentro del mercado único. Por su parte, el artículo 50.2, letra “g” establece las medidas de protección de los intereses de los socios y terceros en las empresas, esta disposición se traduce en la adopción de normas comunes para asegurar que las empresas cumplan con estándares de diligencia debida en materia de derechos humanos y sostenibilidad. La segunda base jurídica, el artículo 114, permite a la Unión Europea la capacidad de adoptar medidas que garanticen la armonización de las legislaciones nacionales en el ámbito del mercado interior. De esta forma se busca minimizar las posibles distorsiones en la competencia entre los Estados miembros, ya que una diligencia debida sin una debida armonización generar desigualdades competitivas, permitiendo que algunas empresas operen con menos restricciones en materia de sostenibilidad y derechos humanos, distorsionando el mercado común.

2.1. LA APLICABILIDAD DE LA DIRECTIVA

2.1.1. El término empresa en la Directiva 2024/1760

La Directiva 2024/1760, en su artículo 3.1 a), establece una definición amplia y detallada de lo que se considera una "empresa" a efectos de su aplicación. Esta definición incluye distintos tipos de entidades jurídicas:

a) Empresas constituidas en la UE

La directiva considera como empresa a cualquier persona jurídica establecida bajo alguna de las formas indicadas en los anexos I y II de la Directiva 2013/34/UE. Estos anexos detallan los tipos de sociedades mercantiles reconocidas en los Estados miembros de la UE, como sociedades anónimas (S.A.), sociedades de responsabilidad limitada (S.L.), entre otras.

b) Empresas de terceros países

La normativa también se extiende a empresas constituidas fuera de la UE si su forma jurídica es comparable a las mencionadas en la Directiva 2013/34/UE. Es importante este punto puesto que impide que empresas extranjeras que operan en la UE eludan las regulaciones simplemente por estar registradas en jurisdicciones con estándares menos estrictos. Por lo que, cualquier entidad que haga negocio en la Unión Europea tendrá que cumplir los mismos criterios de sostenibilidad y responsabilidad con los derechos humanos.

c) Empresas financieras reguladas

Además de las empresas generales tanto europeas como de terceros países, la directiva incluye una categoría especial para empresas financieras reguladas, sin importar su forma jurídica. Dentro de este grupo se encuentran: entidades de crédito, según lo definido en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, empresas de servicios de inversión, reguladas por la Directiva 2014/65/UE; gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), incluyendo aquellos especializados en capital riesgo, emprendimiento social e inversión a largo plazo; sociedades de gestión de fondos de inversión, conforme a la Directiva 2009/65/CE y las empresas de seguros y reaseguros, reguladas bajo la Directiva 2009/138/CE.

Esta categorización específica es relevante puesto que las entidades financieras juegan un papel clave en la financiación de actividades económicas. Al incluirlas en la definición de empresa dentro de la directiva, la UE busca garantizar que también adopten medidas de diligencia debida en sus operaciones y en la financiación de terceros.

2.1.2. Ámbito de aplicación

Respecto al ámbito de aplicación a Directiva establece en el artículo 2 criterios claros en función del tamaño, la facturación y la estructura empresarial sobre las entidades obligadas a su cumplimiento. Sobre las empresas registradas en un Estado miembro de la UE (artículo 2.1), la directiva se aplica a aquellas que superen ciertos umbrales financieros y de personal. Aquellas empresas que tengan más de 1.000 empleados y un volumen de negocios mundial neto superior a 450 millones de euros en el último ejercicio financiero aprobado tienen que establecer diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos. No obstante, la normativa también prevé su aplicación a aquellas empresas que, aun sin alcanzar estos umbrales de forma individual, formen parte de un grupo empresarial donde la empresa matriz última sí los supere, aquí se puede observar de forma muy clara la filosofía de la directiva de impactar en las cadenas de suministros internacionales acabando con las situaciones de vulneración de derechos humanos y medioambientales por las empresas filiales, sobre todo en terceros países. Además de las grandes corporaciones, la directiva

también extiende sus disposiciones a empresas que operan bajo modelos de franquicia o licencia dentro de la Unión. Se establece que aquellas entidades que celebren acuerdos de franquicia o licencia en la UE, siempre que dichos acuerdos impliquen una identidad común, un concepto empresarial uniforme y el pago de cánones superiores a veintidós millones quinientos mil euros en el último ejercicio financiero, quedarán sujetas a la normativa si su volumen de negocio mundial neto supera los ochenta millones de euros. Este criterio responde a la necesidad de evitar que ciertas estructuras empresariales puedan eludir sus responsabilidades mediante la descentralización operativa de sus actividades.

El ámbito de aplicación de la directiva también abarca a aquellas entidades constituidas en terceros países que tengan una presencia económica significativa en el mercado europeo (artículo 2.2). En este sentido, la normativa se aplicará a aquellas empresas extranjeras cuyo volumen de negocios neto en la UE supere los cuatrocientos cincuenta millones de euros en el ejercicio financiero anterior. Asimismo, si una empresa matriz última de un grupo extranjero alcanza estos umbrales en términos consolidados, todas las entidades bajo su control deberán cumplir con las disposiciones establecidas. De igual manera, aquellas empresas de terceros países que operen en la UE mediante acuerdos de franquicia o licencia quedarán sujetas a la directiva si los cánones generados en el territorio comunitario superan los 22,5 millones de euros y si el volumen de negocio neto en la Unión es superior a 80 millones de euros. Sin embargo, la directiva prevé una exención específica para aquellas empresas matrices últimas cuya actividad principal consista únicamente en la tenencia de acciones en filiales operativas y que no participen activamente en la toma de decisiones financieras, operativas o de gestión del grupo (artículo 2.3). En estos casos, la empresa matriz puede quedar exenta del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la directiva siempre que designe a una de sus filiales establecidas en la UE para asumir dichas responsabilidades en su nombre. Para que esta exención sea efectiva, la filial designada debe contar con todos los medios y la autoridad jurídica necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y disponer de la información relevante sobre las operaciones del grupo. La empresa matriz última deberá presentar la solicitud de exención ante la autoridad de control competente, que evaluará si se cumplen los requisitos exigidos. En caso de aprobación, la autoridad de control informará a la entidad supervisora del Estado miembro en el que se encuentre establecida la filial designada para asegurar el seguimiento de las obligaciones en materia de diligencia debida.

2.1.3. Implantación de la directiva

El artículo 37 de la directiva en cuestión establece un calendario progresivo de implantación, permitiendo a los Estados miembros y a las empresas adaptarse de manera escalonada y bastante flexible a sus nuevas obligaciones. Este proceso de implementación se extiende desde el año 2026 hasta el año 2029.

La primera fecha marcada en el calendario es el 26 de julio de 2026. Después de dos años de su aprobación se cumple el periodo establecido para que los estados miembros hayan adoptado y publicado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar su cumplimiento, mediante transposición de la normativa a las legislaciones nacionales, asegurando un marco legal coherente en toda la UE.

Para el sector empresarial la primera fecha a tener en cuenta es el 26 de julio de 2027, cuando comienzan a aplicarse las obligaciones de la directiva para las empresas de mayor tamaño. Mediante esta flexibilización la Unión busca que el cumplimiento de la directiva por parte de las empresas sea más fácil, exigiendo un plazo menor cuanto más grande es la

empresa. En el año 2027 serán todas aquellas empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocios superior a 1.500 millones de euros, esta exigencia se realizará tanto a empresas de la UE como empresas extranjeras con actividad en el mercado comunitario. Seis meses después, a partir del 1 de enero de 2028 estas empresas deberán de empezar a comunicar públicamente sus diligencias debidas, en cumplimiento del Artículo 16³ de la directiva.

Para las empresas que tienen más de 3.000 empleados y un volumen de negocios superior a 900 millones de euros el 26 de julio de 2028 tendrán que comenzar a aplicar las obligaciones que establece la normativa. Seis meses después, a partir del 1 de enero de 2029 entrará en vigor la obligación de comunicación a las autoridades pertinentes de su diligencia debida adoptada.

Finalmente, el último momento clave en la implantación de esta política comunitaria es el 26 de julio de 2029, momento en el que la normativa se extenderá a todas las empresas incluidas en el artículo 2 de la directiva, es decir, todas las empresas con menos de 3.000 trabajadores y más de 1.000, además de todos los estadios previstos por volumen de negocio, deberán de tener adoptada una diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos. Estas empresas también tendrán seis meses para hacer efectiva su comunicación pública de la medida.

Con esta implementación escalonada, la UE busca facilitar la transición hacia un marco regulador armonizado, asegurando que las empresas tengan el tiempo necesario para adaptar sus estructuras y procesos a las nuevas exigencias de sostenibilidad y derechos humanos. Al mismo tiempo, el calendario permite una supervisión progresiva del impacto de la normativa, permitiendo a las autoridades y las empresas ajustar las estrategias conforme avanzan las diferentes fases de aplicación.

Asimismo, es importante resaltar que durante la realización de esta investigación se ha llevado a cabo la aprobación de la Directiva 2025/794, aprobada el 14 de abril de 2025, que introduce modificaciones clave que afectan al calendario y al proceso de implantación del artículo 37 de la Directiva 2024/1760. En particular, esta nueva normativa pospone los plazos originales para la transposición y aplicación de las obligaciones en materia de diligencia debida, ampliando los periodos de adaptación para los Estados miembros y las empresas. Este aplazamiento responde a la necesidad de garantizar una implementación más realista y efectiva, dado el impacto y la complejidad que implica cumplir con los estándares de sostenibilidad y derechos humanos a nivel europeo, especialmente en sectores con estructuras empresariales complejas o en economías con menor capacidad de adaptación inmediata. El artículo 2 de la directiva 2025/794 pospone un año cada uno de los momentos clave de la implantación de la directiva comentados con anterioridad.

2.2. OBLIGACIONES CLAVE DE LAS EMPRESAS

Gorelli (2025) señala que la diligencia debida se presenta como una obligación compleja, con un contenido incorpora diferentes actuaciones a realizar por la empresa, las cuales no

³ Esto implica la publicación de informes detallados sobre los riesgos identificados en sus operaciones y cadenas de suministro, así como las medidas adoptadas para prevenir o mitigar impactos negativos en materia de derechos humanos y sostenibilidad.

son siempre idénticas, pueden cambiar dependiendo del tipo de empresa. Las obligaciones clave que recoge la directiva se estructuran a partir de tres ejes principales según Domínguez et al. (2024): 1) que por su naturaleza fuesen aplicables a empresas; 2) que estuvieran contenidas en normas o tratados internacionales que fueran vinculantes; y 3) habiendo sido ratificados por todos los estados miembro en el caso de los tratados internacionales. Estas obligaciones se pueden resumir en implementación de la directiva, transparencia y comunicación pública e integración de la sostenibilidad en el eje estratégico empresarial.

2.2.1. Procedimiento de implantación de la diligencia debida

El objetivo de la obligación de la diligencia debida mediante la implementación de la misma es la reparación efectiva y preceptiva por parte de la empresa (Domínguez et al., 2024). Para ello se establece en esta investigación un procedimiento de cuatro pasos, ver ilustración 1, que agrupa los estadios descritos por la directiva:

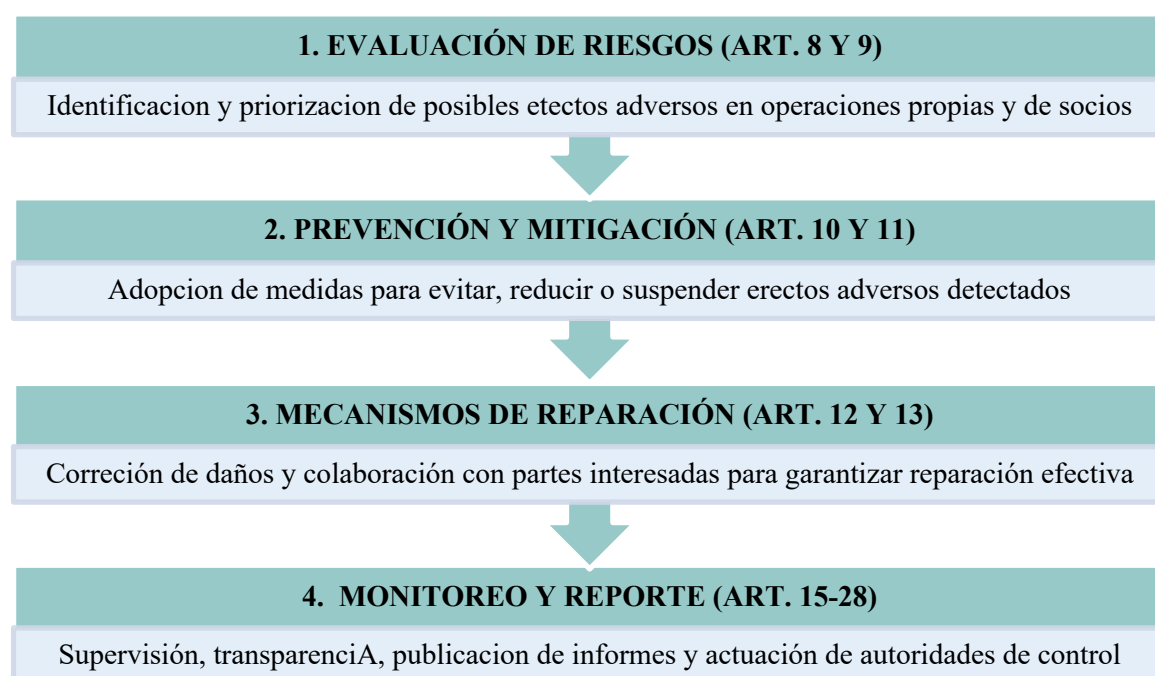


Ilustración 1. Representación gráfica del proceso de diligencia debida propuesto en esta investigación. Elaboración propia.

a) Evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos por parte de las empresas queda recogida en el artículo 8 de la directiva. Como primer paso, las empresas deben realizar un inventario exhaustivo de sus propias operaciones (artículo 8.2a), así como de las actividades de sus filiales y socios comerciales. El objetivo de este inventario es determinar en qué áreas es más probable que ocurran efectos adversos y cuáles pueden ser los más graves. Partiendo de este inventario inicial, las empresas están obligadas a llevar a cabo una evaluación en profundidad de sus operaciones (artículo 8.2b), filiales y socios comerciales en los ámbitos en los que se haya detectado un mayor riesgo de impactos negativos.

Dentro del procedimiento de la evaluación de riesgos, es relevante el principio de priorización de efectos adversos (artículo 9), en este punto el legislador reconoce que, en ciertos casos, las empresas pueden no ser capaces de abordar simultáneamente todos los impactos negativos detectados en sus operaciones o cadenas de suministro. La priorización de estos es exigida a partir de la gravedad y probabilidad, tiene una doble vertiente, por

tanto, exigiendo que se prioricen aquellos efectos que sean más graves y más probables. Este principio hace que la etapa de evaluación de riesgos sea efectiva (Mackie, 2021), ayudando a que la diligencia debida en su totalidad sea un proceso abordable por las empresas.

b) Medidas de prevención y mitigación

El segundo paso de la diligencia debida será establecer las medidas de prevención (artículo 10) y mitigación (artículo 11) de los efectos adversos identificados. En primer lugar, las empresas deben adoptar medidas adecuadas para prevenir o mitigar estos efectos, considerando su capacidad de influencia sobre socios comerciales y la naturaleza de las operaciones. Dentro de estas medidas se incluyen la elaboración de planes de acción preventiva, obtención de garantías contractuales y realización de inversiones necesarias. En casos donde no sea posible prevenir o mitigar suficientemente, se contempla la suspensión o terminación de relaciones comerciales como último recurso. Una vez establecidas las medidas de prevención se abordará la eliminación de efectos adversos reales, mediante los cuales, las empresas están obligadas a adoptar medidas para eliminar estos efectos o, si no es posible, minimizar su alcance. Esto implica acciones como neutralizar el efecto adverso, elaborar planes de acción correctiva y colaborar con socios comerciales para garantizar el cumplimiento de códigos de conducta.

Es de igual forma relevante, algunas disposiciones concretas que se establecen en los artículos 10 y 11 en el marco de esta etapa del procedimiento, como es la posibilidad de suspender o poner fin a las relaciones comerciales con un socio si, tras haber agotado otras medidas como la prevención o mitigación de impactos adversos, estas no resultan efectivas.

c) Mecanismos de reparación

En el caso en el que se detecten impactos negativos en las anteriores etapas del procedimiento, los artículos 12 y 13 abordan dos aspectos fundamentales de la responsabilidad empresarial: la reparación de efectos adversos y la colaboración con las partes interesadas.

De esta forma, el artículo 12 se centra principalmente en la reparación de los efectos adversos reales causados por las empresas, especificando que deben tomar las medidas necesarias para corregir estos efectos, aunque estos hubiesen sido causados por un socio comercial. Si el daño es exclusivamente responsabilidad de un socio comercial, la empresa afectada tiene la opción de reparar el daño de manera voluntaria o influir en el socio para que lo haga, siempre que esto sea posible. Este precepto refleja una visión creciente sobre la necesidad de responsabilizar a las empresas no solo por sus propios actos, sino también por las acciones de sus asociados, promoviendo una cadena de responsabilidad compartida (Gereffi, 2020). Dentro de los mecanismos de reparación se incluyen compensaciones a comunidades afectadas, la restauración de ecosistemas dañados o la adopción de medidas correctivas para evitar la repetición de las vulneraciones, además se permite a los afectados presentar quejas y obtener soluciones justas y proporcionales.

Por otro lado, el artículo 13 establece la obligación de las empresas de colaborar de manera constructiva con las partes interesadas, proporcionando, así, información relevante y garantizando un proceso de consulta transparente y efectivo. La consulta con las partes que puedan ser interesadas en el procedimiento de diligencia se establece que debe realizarse en varias fases del proceso de diligencia debida, incluyendo las etapas de identificación de efectos adversos, el desarrollo de planes de acción preventiva y correctiva, y la adopción

de medidas para reparar los daños. Asimismo, se especifica que las empresas deben garantizar que las partes interesadas puedan presentar solicitudes de información adicional y que no sufrirán represalias por su participación, este precepto se alinea con ideas de autores contemporáneos que subrayan la importancia de la cooperación interorganizacional en la gestión de riesgos globales y la sostenibilidad según establece Ruggie (2018). Este tipo de enfoques son clave para fomentar una gobernanza empresarial que no solo busque el beneficio económico, sino que también proteja los derechos humanos y el medio ambiente en la práctica.

d) Monitoreo, supervisión, transparencia y reporte

La etapa de monitoreo y seguimiento de la diligencia debida establecida en la Directiva 2024/1760 se articula en varias fases clave, recogidas en los artículos 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25 y 28. En primer lugar, se establece la obligación de las empresas de llevar a cabo evaluaciones periódicas (artículo 15) sobre sus operaciones, las de sus filiales y las de sus socios comerciales dentro de la cadena de actividades. Estas evaluaciones deben realizarse al menos una vez al año o cuando surjan nuevos riesgos significativos. Las evaluaciones periódicas deberán ser comunicadas públicamente (artículo 16) mediante una declaración anual accesible en su sitio web, donde se incluirá información sobre los riesgos identificados, las medidas adoptadas y su eficacia. Mediante este precepto se busca una mayor transparencia en el proceso, con comunicación accesible y estandarizada por parte de las empresas se vitará que *“la falta de transparencia puede obstaculizar la rendición de cuentas y debilitar la confianza del público y de los inversores”* (considerando 52 de la directiva). Las diferentes directrices sobre transparencia en el proceso serán armonizadas a través de actos delegados de la Comisión según establece el apartado 3 del artículo 16. Asimismo, con el objetivo de armonizar la transparencia en este respecto, a partir del año 2029 se establecerá un Punto de Acceso Único Europeo, donde las empresas deberán subir sus declaraciones anuales, asegurando su accesibilidad digital.

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones está previsto que la Comisión, en colaboración con otras agencias, elabore directrices orientativas para las empresas (artículo 19), incluyendo prácticas recomendadas, herramientas de apoyo digital, sistemas de alerta y colaboración entre partes interesadas. En línea con esto, se establece que los Estados creen plataformas nacionales de apoyo y servicios de asistencia (artículo 20), especialmente destinados a las pymes. Estas plataformas centralizarán recursos como modelos contractuales, guías y acceso a financiación, y fomentarán iniciativas sectoriales verificadas. También se contempla la posibilidad de recurrir a auditorías independientes como medida complementaria de verificación. De igual forma se creará un servicio de ayuda centralizado a nivel europeo (artículo 21), sin perjuicio de los que se puedan crear a nivel nacional, coordinado por la Comisión, ofreciendo información y orientación práctica a empresas sobre sus obligaciones.

Dentro del procedimiento de supervisión, el artículo 24 establece la estructura institucional de esta, exigiendo que cada Estado miembro designe una o más autoridades nacionales de control encargadas de vigilar el cumplimiento de la Directiva. Estas autoridades deben ser independientes, imparciales y contar con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones. Cuando una empresa matriz actúe en nombre de sus filiales no teniendo sede en algún país miembro o teniendo varias sedes, las autoridades de control serán apoyadas por la Red Europea de Autoridades de Control, tal como se establece en el artículo 28. Por lo que se establece un foro superior a las autoridades nacionales para que ninguna empresa debido a su estructura empresarial pueda escapar a este control. Asimismo, los Estados

miembros deberán comunicar de forma periódica a la Comisión los datos de estas autoridades y garantizar que publiquen un informe anual sobre sus actividades. Tal como estipula el artículo 24.9, *“los Estados miembros garantizarán la independencia de las autoridades de control [...] y velarán por que ejerzan sus competencias de manera imparcial, transparente y con el debido respeto de las obligaciones de secreto profesional”*. Las competencias de las autoridades nacionales quedan dibujadas en el artículo 25, las cuales incluyen la facultad de exigir información, realizar investigaciones y supervisar la elaboración del plan de transición climática. Estas podrán actuar de oficio o tras recibir indicios fundados de incumplimiento, realizar inspecciones, ordenar medidas correctivas, imponer sanciones y adoptar medidas provisionales en caso de riesgo inminente.

2.2.2. Responsabilidad de las empresas y sanciones asociadas

La directiva establece de forma clara cuál es la responsabilidad de la empresa en el proceso de diligencia debida, además de establecer un marco de sanciones administrativas y civiles para asegurar que las empresas actúan conforme al espíritu de la norma. Uno de los pilares del sistema de “enforcement” es la vía administrativa, mediante esta las autoridades nacionales de supervisión, en base a sus competencias establecidas en el artículo 25, podrán establecer sanciones a las empresas que incumplen sus obligaciones. Estas sanciones (artículo 27) deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, actuando por medio de multas económicas y declaraciones públicas sobre las empresas infractoras. En los casos más graves, estas sanciones pueden alcanzar al menos un 5 % del volumen de negocios mundial neto de la empresa anual, claramente este monto es un elemento intenta ser disuasorio. Para la imposición de las sanciones se valoran factores como la gravedad y duración de la infracción, las medidas de reparación adoptadas, los beneficios obtenidos ilícitamente o la existencia de reincidencia. Se busca de esta forma que la respuesta sancionatoria se ajuste de la forma más justa al impacto real que ha tenido el incumplimiento en la cadena de valor. Como señalan Domínguez et al. (2024), este régimen sancionador pretende también garantizar que las empresas cesen de inmediato las actividades que están causando daño.

Más allá del plano administrativo, se establece un mecanismo de responsabilidad civil recogido en el artículo 29. Este aspecto fue especialmente debatido durante el proceso legislativo, pues supone una innovación importante en los regímenes tradicionales de responsabilidad de muchos Estados miembros. El modelo adoptado se basa en un esquema subjetivo fundado en la culpa, donde la empresa será responsable siempre que se cumplan dos condiciones: que haya actuado con negligencia o dolo en el incumplimiento de sus deberes de diligencia debida (Monereo et al., 2024). Este enfoque responde a la lógica del principio de reparación efectiva: las víctimas deben poder acceder a una compensación plena, pero no excesiva, lo cual se garantiza mediante la prohibición de indemnizaciones punitivas o múltiples. Se trata, por tanto, de asegurar la proporcionalidad entre el daño y la compensación, respetando los principios fundamentales del Derecho civil. Para facilitar el acceso a la justicia, sobre todo para víctimas vulnerable, se han introducido importantes garantías procesales: plazos de prescripción amplios, legitimación activa extendida a ONG, sindicatos e instituciones de derechos humanos, así como mecanismos para el acceso a pruebas en manos de las empresas. Asimismo, los tribunales podrán ordenar medidas cautelares que obliguen a cesar conductas infractoras antes de que concluyan los procedimientos judiciales, según Domínguez et al. (2024) estas garantías fueron la concesión al Parlamento en el acuerdo final, y representan un avance relevante para la justiciabilidad de los derechos vulnerados en el marco empresarial. El régimen de

responsabilidad descrito busca cerrar el ciclo de la diligencia debida pasando de la simple identificación del riesgo a la reparación efectiva de los daños y al establecimiento de consecuencias jurídicas reales para las empresas incumplidoras. Consolidando así una arquitectura de gobernanza empresarial más justa, donde la protección de los derechos humanos y el medio ambiente tiene respaldo legal y no se limita a compromisos voluntarios.

A modo de cierre, el análisis realizado hasta el presente punto ha permitido construir un marco teórico sólido sobre la diligencia debida en el contexto jurídico europeo, prestando especial atención a la Directiva, a sus antecedentes normativos y jurisprudenciales y la aplicación de la norma. Esta base conceptual es imprescindible para comprender el alcance real de las nuevas obligaciones que se imponen a las empresas y para situar adecuadamente el debate sobre su aplicabilidad en contextos específicos. No obstante, para valorar con mayor precisión el impacto potencial de esta normativa en el tejido empresarial andaluz, se hace necesario trasladar esta reflexión teórica a un plano más aplicado. En este sentido, el siguiente punto se centrará en el análisis práctico del caso andaluz, abordando la estructura económica y empresarial de la región, así como los principales retos y oportunidades derivados de la futura implementación de la Directiva, especialmente en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas.

3. RESPECTO DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y LA DIRECTIVA 2024/1076

3.1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL DE ANDALUCÍA

Para entender la forma en la que las empresas de la comunidad autónoma de Andalucía se van a adaptar a la aplicación efectiva de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad es importante hacer un ejercicio de análisis del contexto económico y del sector empresarial del territorio. En este sentido, Andalucía representa un caso de especial interés por su tejido empresarial diverso y su papel relevante en sectores como la agroindustria y el turismo, principalmente. Analizar cómo se articula la aplicación de la Directiva en el sector empresarial de esta comunidad permite comprender los desafíos prácticos de su implementación, así como las oportunidades para reforzar los mecanismos de control, acompañamiento empresarial o la participación de los actores sociales en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida.

3.1.1. La estructura sectorial de la economía andaluza

La economía de Andalucía se caracteriza por una notable dependencia hacia ciertos sectores tradicionales que configuran su identidad productiva y social. El sector agrario, la industria y los servicios, concretamente el turismo, son los pilares fundamentales que definen la estructura económica de esta comunidad autónoma.

El sector agrícola tiene un peso significativo en Andalucía, siendo una de las regiones más importantes en la producción agrícola de España y Europa. La agricultura andaluza se distingue por su especialización en cultivos mediterráneos, especialmente olivar, cítricos, frutas y hortalizas. Según la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (2024) el sector agrícola aporta aproximadamente un 5,6% al Producto Interior Bruto regional, muy superior al 2,3% respecto a los datos estatales, generando un importante volumen de empleo, especialmente en zonas rurales. Este sector se caracteriza también por

la presencia de una agroindustria vinculada, que añade valor mediante la transformación y exportación de productos agrícolas (García et al., 2019).

El sector industrial andaluz representa el 10,8 % de su PIB, aunque tradicionalmente ha estado menos desarrollado que en otras regiones españolas como Cataluña, donde la industria supone el 17%, o el País Vasco, con el índice porcentual más alto del estado llegando al 22%⁴. No obstante, existen industrias consolidadas en sectores como la química, la automoción, la agroalimentación y la energética, sectores clave en relación con el medioambiente, lo que convierte a la diligencia debida en una herramienta más que interesante respecto a la prospectiva de este sector. La industria química, especialmente vinculada a la refinería y producción de productos petroquímicos en la Bahía de Algeciras, representa un foco industrial de gran relevancia. Además, la industria agroalimentaria, estrechamente ligada al sector primario, es un motor importante para la economía regional, con numerosas empresas orientadas a la exportación (Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, 2024) .

Por otro lado, el sector servicios domina la economía andaluza, representando más del 70% del PIB regional y empleando a la mayor parte de la población activa. El turismo es el subsector más destacado dentro de los servicios, gracias a la riqueza cultural, natural y patrimonial de Andalucía. Ciudades como Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba, junto con su clima y costa, atraen a millones de visitantes cada año, convirtiendo el turismo en un motor esencial para el crecimiento económico y la generación de empleo (Albaladejo, 2022).

3.1.2. El tejido empresarial andaluz

Partiendo del *Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2023*, elaborado por el Consejo Económico y Social de Andalucía (2024), se puede trazar una panorámica detallada del tejido empresarial andaluz, con especial atención al tamaño de las empresas que resulta lo más idóneo para poder analizar la aplicabilidad de la directiva.

En primer lugar, el número total de empresas activas en Andalucía en 2023 ascendía a 531.045, según los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE)⁵. Esta cifra sitúa a la comunidad como la segunda con mayor número de empresas a nivel nacional, concentrando el 16,2% del total estatal, solo por detrás de Cataluña (18,4%) y por delante de Madrid (15,7%).

Uno de los rasgos más relevantes del tejido empresarial andaluz es su altísimo grado de atomización. El 95,8% de las empresas son microempresas, es decir, tienen menos de 10 empleados. De este porcentaje, un 53,1% no cuenta con ningún trabajador asalariado, mientras que el 42,7% restante tiene entre 1 y 9 trabajadores. Esta proporción prácticamente replica la media nacional, donde las microempresas suponen el 95,2% del total, lo que indica que esta estructura empresarial reducida es una característica estructural del conjunto del país. Por el contrario, las pequeñas, medianas y grandes empresas representan únicamente un 4,2% del tejido empresarial andaluz, lo cual también es ligeramente inferior

⁴ Instituto Nacional de Estadística. (2023). Contabilidad regional de España. Disponible en <https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=72943&L=0>, consultado el 11 de junio de 2025.

⁵ Instituto Nacional de Estadística. (2024). Directorio Central de Empresas, 1 de enero de 2024. Disponible en https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160707&menu=ultiDatos&idp=1254735576550, consultado el 11 de junio de 2025.

al dato estatal (4,8%). La escasa presencia de empresas de mayor tamaño supone un desafío estructural para la región, ya que limita el potencial de crecimiento, competitividad e internacionalización del conjunto empresarial (Crecente et al., 2014).

Desde el punto de vista jurídico, la forma más común de empresa en Andalucía es la de persona física, que representa el 61,8% del total, seguida por las sociedades de responsabilidad limitada, con un 30,8%. Este patrón difiere levemente del conjunto de España, donde las personas físicas representan el 57,1% y las sociedades limitadas el 33%. Esta mayor presencia de empresarios individuales en Andalucía es coherente con la predominancia de microempresas sin asalariados.

En términos territoriales el tejido empresarial andaluz presenta también una elevada concentración en las provincias de Málaga y Sevilla, sumando el 48,1% del total de empresas de la comunidad. En el extremo opuesto, provincias como Almería, Córdoba, Huelva y Jaén no alcanzan el 10% cada una. Es evidente que esta concentración plantea problemas en cuanto a equilibrio territorial y desarrollo económico homogéneo de la región.

3.2. APLICABILIDAD DE LA DIRECTIVA Y LAS EMPRESAS EN ANDALUCÍA

La presente normativa establece que deberán cumplir con los requisitos del procedimiento de diligencia debida aquellas empresas que cuenten con más de 1.000 trabajadores, entre otros criterios. En este sentido, como se puede observar en tabla 1, el número total de empresas en Andalucía con más de 1.000 trabajadores asciende a 78, lo que representa un 7,41 % del total de empresas de ese tamaño a nivel estatal (1.052 empresas).

	EMPRESAS ANDALUZAS CON MÁS DE 1.000 TRABAJADORES POR PROVINCIAS			
	TOTAL DE EMPRESAS	De 1000 a 4999	De 5000 o más	TOTAL DE EMPRESAS CON MÁS DE 1.000
ALMERÍA	44.092	12	1	13
CÁDIZ	63.374	6	0	6
CÓRDOBA	48.326	2	0	3
GRANADA	61.384	5	1	6
HUELVA	25.755	2	0	2
JAÉN	34.791	5	0	6
MÁLAGA	131.395	8	2	10
SEVILLA	121.928	30	2	32
ANDALUCÍA	531.045	72	6	76
TOTAL ESTATAL	3.404.428	880	172	1.052

Tabla 1. Desglose provincial número de empresas de más de 500 trabajadores. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Esta proporción es inferior al peso general que Andalucía tiene en el conjunto del tejido empresarial español, ya que, de las 3.404.428 empresas existentes en España, 531.045 se localizan en Andalucía, lo que supone el 16,2 % del total nacional. Estos datos ponen de relieve una estructura empresarial andaluza fuertemente atomizada, con una preponderancia acentuada respecto al total estatal de pequeñas y medianas empresas.

Desde un punto de vista territorial, el análisis provincial ofrece, de igual forma, un panorama desigual. Sevilla es la provincia con mayor número de empresas con más de 1.000 trabajadores, con 32 empresas, lo que representa el 41 % del total andaluz. Le siguen Almería con 13 (16,7%) y Málaga con 10 empresas (12,1 %) y. En cambio, provincias como Huelva (2 empresas), Jaén (5) y Córdoba (2) se encuentran muy por debajo, reflejando una baja densidad de grandes empresas en esos territorios. Esta concentración desigual puede provocar también una implementación territorialmente asimétrica de la Directiva, ya que algunas provincias apenas cuentan con actores que entren dentro del ámbito obligatorio de aplicación inmediata. Es especialmente relevante el caso de la provincia de Almería, donde en datos relativos aporta alrededor del 8% de las empresas en Andalucía y casi el 17% de las empresas de más de 1.000 trabajadores.

El tipo de actividad económica determina el nivel de exposición a riesgos ambientales y sociales implícitos en la diligencia debida. En la tabla 2 se puede observar un desglose por sector económico y actividad principal de las empresas andaluzas de más de 1.000 trabajadores.

Dentro del sector primario andaluz no existen empresas con las dimensiones mínimas para tener que adaptarse a la directiva. El sector secundario reúne 16 empresas de gran tamaño, repartidas entre tres bloques principales: la industria alimentaria y química (4 empresas), la industria manufacturera y eléctrica (7) y el bloque de construcción, energía y residuos (5). Se trata de actividades caracterizadas por su elevada intensidad energética, uso de materias primas y generación de impactos ambientales y sociales a lo largo de toda su cadena de suministro. Por su parte, el sector terciario agrupa la mayoría de las empresas sujetas a la directiva en Andalucía, con un total de 60 compañías. Dentro de este sector, destacan especialmente las actividades de comercio, transporte y hostelería (19 empresas), los servicios profesionales y administrativos (12) y los ámbitos de educación, sanidad y servicios sociales (29).

SECTOR ECONÓMICO	ACTIVIDAD PRINCIPAL	DE 1000 A 4999	DE 5000 O MÁS	TOTAL
SECUNDARIO	INDUSTRIA ALIMENTARIA Y QUÍMICA	4	0	4
	INDUSTRIA MANUFACTURERA Y ELÉCTRICA	7	0	7
	CONSTRUCCIÓN, ENERGÍA Y RESIDUOS	5	0	5
	COMERCIO, TRANSPORTE Y HOSTELERÍA	17	2	19
TERCIARIO	SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS	10	2	12
	EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES	27	2	29

Tabla 2. Desglose de empresas de más de 500 trabajadores en Andalucía por sector económico y actividad principal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

3.3. RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ANDALUZAS

La implementación de la Directiva 2024/1760 plantea un escenario complejo para el tejido empresarial andaluz, pero realmente interesante y estimulante en cuanto a retos y oportunidades para la mejora estratégica del mismo. Las empresas deben hacer frente a un conjunto de requisitos normativos que obligan a revisar en profundidad sus cadenas de suministro, procesos productivos y sistemas de gobernanza.

Entre los principales retos se encuentra, en primer lugar, la descarbonización de los procesos productivos. Andalucía, con un sistema productivo todavía muy dependiente de sectores intensivos en recursos y con bajo valor añadido, se enfrenta a una necesaria reconversión ecológica que podría tener costes significativos, especialmente para las pymes. Esta estructura económica limita la capacidad de adaptación a exigencias regulatorias complejas como las de la Directiva, al requerir inversiones tecnológicas y cambios organizativos para los que muchas empresas aún no están preparadas.

A esto se suma la necesidad de garantizar la trazabilidad de los proveedores y el respeto a los derechos laborales en fases de subcontratación, elementos centrales de la Directiva 2024/1760. Andalucía presenta una brecha territorial significativa que impacta directamente en la disponibilidad de recursos técnicos y humanos para implementar mecanismos de verificación, seguimiento y auditoría adecuados, especialmente en áreas rurales o periféricas. Esta circunstancia podría generar desigualdades entre empresas según su ubicación y tamaño, favoreciendo a grandes firmas y penalizando a las pymes. Aunque la Directiva 2024/1760 se aplica formalmente a grandes empresas, sus efectos se extienden a las pymes al estar integradas en sus cadenas de suministro. Esto representa una oportunidad legislativa para que las pymes adopten prácticas de diligencia debida de forma progresiva, anticipándose a futuras regulaciones y mejorando su competitividad y sostenibilidad en mercados exigentes.

No obstante, junto a estos desafíos, la Directiva también abre importantes oportunidades. Una de las más destacadas es la posibilidad de acceso preferente a financiación verde o sostenible. La Unión Europea y diversas entidades financieras han comenzado a priorizar aquellas empresas que demuestran cumplimiento normativo en sostenibilidad, lo que puede traducirse en una ventaja competitiva significativa (Comisión Europea, 2025).

Asimismo, la Directiva puede funcionar como un incentivo para la transformación digital del tejido empresarial andaluz. A pesar de que el informe de 2023 reconoce limitaciones en la disponibilidad de datos sobre los efectos de la digitalización, también destaca una creciente concienciación y voluntad por parte de las empresas andaluzas para avanzar en este proceso. La digitalización, en este contexto, no solo permite cumplir con los requisitos de trazabilidad y verificación que impone la Directiva, sino que mejora la eficiencia operativa, reduce costes a medio plazo y permite acceder a nuevos mercados (OCDE, 2022).

3.3.1. Análisis DAFO de la Directiva 2024/1760 en el contexto andaluz

El análisis DAFO elaborado a partir del análisis de los retos y las oportunidades a las que se enfrentan las empresas andaluzas con la apuesta en marcha de la directiva, ver tabla 3, permite sintetizar estos elementos, aunque conviene no interpretarlo como un diagnóstico cerrado, sino como una herramienta de lectura crítica del entorno.

Respecto a las debilidades detectadas, resaltan la falta de conocimiento de la Directiva entre las pymes o la dependencia de sectores tradicionales, lo que dificultan una implementación homogénea y efectiva. Esta situación se explica por la baja inversión histórica en innovación y formación, especialmente en pymes del medio rural (CEPYME, 2022).

Fortalezas como la creciente concienciación en sostenibilidad y la capacidad de adaptación temprana ante exigencias regulatorias reflejan el trabajo realizado en los últimos años en responsabilidad social empresarial, la Fundación SERES (2022) onde Andalucía ha sido una de las comunidades más activas en el impulso de buenas prácticas (Fundación SERES, 2022). Asimismo, esta concienciación en materia de sostenibilidad trae consigo la posibilidad de atraer financiación en materia sostenible. Del mismo modo, el impulso de la transformación digital en Andalucía, aunque desigual, ha comenzado a consolidarse como una fortaleza emergente. Iniciativas como los programas de digitalización de pymes o los fondos Next Generation EU han permitido a muchas empresas iniciar procesos de automatización, trazabilidad y gestión de datos (Comisión Europea, 2025), elementos clave para cumplir con los requisitos de diligencia debida. Esta tendencia representa una base sólida para avanzar en el cumplimiento normativo y en la mejora de la competitividad regional.

ANÁLISIS DAFO DIRECTIVA 2024/1760		
	Aspectos negativos	Aspectos positivos
Análisis interno	Debilidades <ul style="list-style-type: none"> • Falta de conocimiento entre las pymes de la Directiva • Estructura económica muy dependiente de sectores tradicionales con bajo valor añadido 	Fortalezas <ul style="list-style-type: none"> • Alta concienciación en sostenibilidad de las empresas andaluzas • Capacidad para atraer financiación en materia sostenible • Impulso de la transformación digital de las empresas
	Amenazas <ul style="list-style-type: none"> • Riesgo en derivar en "green/social washing" • Brecha territorial • Escasez de recursos humanos y técnicos para implantar los procesos de verificación, seguimiento y auditoría 	Oportunidades <ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de cooperación público-privada con universidades y cámaras de comercio • Adaptación temprana frente a futuras exigencias regulatorias • Mayor acceso a mercados internacionales

Tabla 3. Análisis DAFO de la implementación de la Directiva 2024/1760 en Andalucía. Elaboración propia.

En el plano externo, amenazas como el riesgo de incurrir en prácticas de *greenwashing* o *social washing* ponen de manifiesto la necesidad de acompañar los cambios normativos con sistemas de auditoría robustos y transparentes (Montgomery et al., 2023). Asimismo, la brecha territorial, mencionada anteriormente, puede agravar las desigualdades entre

empresas en el acceso a capacidades técnicas, sobre todo respecto a aquellos recursos puestos a disposición para las empresas desde las administraciones públicas.

Sin embargo, hay también oportunidades estratégicas, como la posibilidad de desarrollar alianzas público-privadas con universidades, cámaras de comercio y centros tecnológicos con el objetivo de hacer de Andalucía una localización pionera respecto al respeto medioambiental y a los Derechos Humanos. Del mismo modo, aquellas empresas, obligadas o no, que realicen los cambios establecidos tendrán la oportunidad de tener un mayor acceso a mercados internacionales, especialmente en aquellos más exigentes en términos de sostenibilidad.

El análisis DAFO permite entender de forma global que esta nueva legislación europea no debe solo verse como una imposición normativa por parte de las empresas, sino como un vector de transformación estructural para la economía andaluza. Su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de las instituciones y del tejido empresarial para articular respuestas coordinadas.

Capítulo III. CONSIDERACIONES FINALES

1. LAS PYMES Y LA DILIGENCIA DEBIDA

Uno de los aspectos más relevantes que se desprenden del análisis del contexto empresarial andaluz realizado a lo largo de este trabajo es la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas se integren progresivamente en los procesos de diligencia debida, aun cuando no se encuentren, de momento, dentro del ámbito de aplicación directa de la Directiva 2024/1760. La exclusión formal de estas empresas no obedece, sobre todo, a un criterio técnico relacionado con las dificultades estructurales que enfrentan las pymes para adoptar mecanismos complejos de gobernanza y cumplimiento normativo. La limitada infraestructura técnica, la escasa disponibilidad de recursos humanos y las restricciones financieras hacen inviable exigir, de forma inmediata, el mismo grado de cumplimiento que se demanda a las grandes corporaciones. No obstante, esta realidad no debe derivar en una concepción de la diligencia debida como una herramienta elitista o testimonial, circunscrita a un porcentaje muy reducido del tejido empresarial europeo. En regiones como Andalucía, donde más del 95 % de las empresas son pymes, su implicación resulta esencial para alcanzar los objetivos medioambientales y de derechos humanos que promueve la nueva normativa. La real importancia del espíritu de esta directiva no es el proceso de diligencia debida en sí, sino un cambio en la cultura empresarial incluyendo un dogma de sostenibilidad y de especial atención al cumplimiento de los Derechos Humanos. Si estas empresas no asumen, aunque sea de forma gradual y adaptada, procesos de identificación, prevención y mitigación de impactos negativos, el impacto transformador de la Directiva será estructuralmente limitado.

En este sentido, es fundamental que las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, desempeñen un papel activo en la provisión de recursos, formación, asesoramiento técnico y acompañamiento normativo, a fin de facilitar la incorporación voluntaria de prácticas inspiradas en la diligencia debida. Esta función de acompañamiento no debe entenderse únicamente en términos de cumplimiento legal futuro, sino también como una oportunidad estratégica para fomentar una cultura empresarial basada en la sostenibilidad, la transparencia y la responsabilidad social.

La concienciación medioambiental no puede seguir siendo un patrimonio exclusivo de grandes empresas con visibilidad internacional. La transformación ecológica de la economía requiere un compromiso transversal y colectivo, en el que también las pymes, por pequeñas que sean, se conviertan en agentes activos del cambio. Fomentar en ellas una lógica de mejora continua y responsabilidad compartida es clave para que el proceso de transición sostenible sea verdaderamente inclusivo, justo y eficaz. Para ello se presenta como objetivo específico en este Trabajo de Fin de Máster ofrecer una dimensión propositiva y prospectiva referido a esto. Entre las propuestas que emanan de un análisis y reflexión del procedimiento de la directiva se encuentran (1) la elaboración de guías prácticas por sectores, con lenguaje accesible y orientadas a la casuística andaluza (agroindustria, turismo, servicios), que faciliten a las pymes el conocimiento y aplicación gradual de los principios de diligencia debida; (2) la creación de programas de formación continua, en colaboración con universidades, cámaras de comercio y colegios profesionales, que permitan capacitar a responsables empresariales en materia de sostenibilidad, gestión de riesgos y cumplimiento normativo; (3) establecer plataformas digitales de cooperación y apoyo técnico, gestionadas por la administración pública o entidades mixtas, donde las empresas puedan acceder a herramientas de autodiagnóstico,

modelos de contratos responsables, alertas normativas o espacios de asesoramiento gratuito; y (4) la implementación de medidas que incentiven fiscal y financieramente a aquellas pymes que cumplan de forma voluntario de objetivos de sostenibilidad y derechos humano, como es el acceso prioritario a líneas de financiación verde, bonificaciones fiscales o certificaciones regionales de buenas prácticas.

2.CONCLUSIÓN

La aprobación de la Directiva 2024/1760 marca un punto de inflexión en la evolución del derecho empresarial europeo, al establecer obligaciones concretas de diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos. Este trabajo ha analizado su aplicabilidad en el contexto andaluz, caracterizado por un tejido empresarial fuertemente atomizado y una estructura económica dependiente de sectores tradicionales como la agroindustria y el turismo. En este sentido, la Directiva no solo representa un reto regulatorio, sino una oportunidad para reorientar el modelo productivo regional hacia criterios de responsabilidad, trazabilidad y compromiso social.

La revisión del marco normativo y doctrinal ha puesto de manifiesto que la diligencia debida ya no puede entenderse como un mero ejercicio voluntario de responsabilidad social corporativa. Tal y como señalan Domínguez Viera et al. (2024), nos encontramos ante un nuevo enfoque que combina exigencias jurídicas con una redefinición de los principios de gobernanza empresarial. La influencia de instrumentos internacionales como los Principios Rectores de la ONU (Ruggie, 2011) o la Guía de la OCDE (2018) se traduce ahora en obligaciones concretas respaldadas por sanciones administrativas y de responsabilidad civil.

La jurisprudencia reciente, especialmente el fallo del Tribunal de La Haya contra Shell (2021), ilustra cómo los tribunales han empezado a reconocer que las empresas no pueden eludir sus deberes medioambientales amparándose en el cumplimiento formal de normativas laxas. En esta línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha reforzado el principio de unidad económica entre matrices y filiales (TJUE, C-882/19), abriendo la puerta a una interpretación más exigente de la responsabilidad empresarial transnacional.

En el caso andaluz, los datos muestran que solo una proporción ínfima de empresas estaría directamente obligada por la normativa, solamente 76 empresas de las 351.045 existentes en Andalucía, lo que podría reducir su alcance transformador si no se adoptan medidas complementarias. Es por ello por lo que este trabajo propone una serie de acciones estratégicas que permitan la incorporación progresiva de las pymes a los principios de la diligencia debida. El desarrollo de herramientas sectoriales, programas de formación, plataformas digitales de apoyo técnico y estímulos fiscales son pasos necesarios para evitar que la sostenibilidad empresarial quede restringida a las grandes corporaciones.

El análisis DAFO ha puesto de manifiesto que las debilidades estructurales del tejido productivo andaluz, como la escasa capacitación técnica o la brecha territorial, pueden ser compensadas por fortalezas emergentes, como la creciente concienciación medioambiental o la digitalización empresarial impulsada por los fondos europeos. En este contexto, resulta indispensable que las administraciones públicas jueguen un papel activo en la creación de un entorno favorable para la transición hacia prácticas más responsables.

En conclusión, la Directiva 2024/1760 plantea una oportunidad estratégica para que las empresas andaluzas avancen hacia un modelo económico más sostenible, justo y competitivo. Sin embargo, su éxito no dependerá únicamente del cumplimiento normativo, sino de la capacidad colectiva de transformar una exigencia legal en una cultura empresarial profundamente comprometida con el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albaladejo, I. P., González Martínez, M. J., Martínez García, M. P. (2022). Evolución del turismo en España: Cataluña y Andalucía versus Baleares y Canarias. *Economía industrial*, 426, 37-44.

Alonso Pascual, C. (7 de junio de 2022). El peso de la industria retrocedió en Andalucía en 2020, pero ya ha vuelto a niveles previos a la pandemia. Newtral. <https://www.newtral.es/retroceso-industria-andalucia-psoe-factcheck/20220607/>

Ayago, A. D. (2022). Desde la Propuesta de Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial hasta su concreción en el espacio judicial europeo. *Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales*, (91-92).

CEPYME. (2024). Situación de las pymes en España. Disponible en <https://cepyme.es/situacion-de-las-pymes/>, consultado el 12 de junio de 2025.

Comisión Europea. (2025). 2025 Annual Single Market and Competitiveness Report. COM(2025)26. Disponible en <https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vmkgh4sqp7ka> , consultado el 12 de junio de 2025.

Comisión Europea. (2025). Corporate sustainability due diligence. Disponible en https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en, consultado el 12 de junio de 2025.

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (2024). Caracterización del sector agrario y pesquero de Andalucía 2024. Disponible en <https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2025-01/Caracterizacion%20del%20sector%20agrario%202024.pdf> , consultado el 10 de junio de 2025.

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía (2024). Informe económico de Andalucía 2023. Disponible en <https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2024/07/InformeEconomico2023.pdf> , consultado el 11 de junio de 2025.

Consejo Económico y Social de Andalucía (2024). Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2023. Disponible en https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2023-03/1_2389_Informe2021.pdf, consultado el 11 de junio de 2025.

Crecente Romero, F., Martos, E. I., Rivera Galicia, L. F. (2014). Análisis de la demografía empresarial de las regiones españolas: Evolución y fuentes. Universidad de Alcalá.

Domínguez Viera, J., Lizarraga Cubillos, J. (2024). La diligencia debida en un contexto de transformación interna y externa de la UE. *Informacion Comercial Espanola Revista de Economia*, (937).

European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). (2017). *French corporate duty of vigilance law: FAQ*. Respect International. Disponible en <https://respect.international/wp-content/uploads/2017/10/french-corporate-duty-of-vigilance-law-faq.pdf>

Fuertes, G., Alfaro, M., Vargas, M., Gutierrez, S., Ternero, R., Sabattin, J (2020). Conceptual Framework for the Strategic Management: A Literature Review—Descriptive. *Journal of Engineering*, Article ID 6253013.

Fundación SERES. (2022). VIII Informe del impacto social de las empresas. Disponible en <https://www.fundacionseres.org/Repositorio%20Archivos/Informes/informe-impacto-social-empresas-2022.pdf>, consultado el 12 de junio de 2025.

García, J., Martínez, L., Pérez, R. (2019). Agricultura y desarrollo rural en Andalucía: desafíos y oportunidades. *Revista de Economía Agraria*, 54(2), 121-138.

Gereffi, G. (2020). *Global value chains and international business: An overview*. In M. P. Doz, M. A. Santos, & J. D. Forrester (Eds.), *Handbook of Research on International Business and Trade* (pp. 117-131). Edward Elgar Publishing.

Gorelli Hernández, J. (2025). El Contenido del Deber de Diligencia Debida en la Directiva 2024/1760 de la Unión Europea. *Revista Trabalho, Direito e Justiça*, 3(1), e113-e113.

Guamán Hernández, A. (2022). Diligencia debida en derechos humanos: ¿un instrumento idóneo para regular la relación entre derechos humanos y empresas transnacionales?. *Revista de derecho social*, (95), 65.

Hill, T., Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: it's time for a product recall. *Long range planning*, 30(1), 46-52.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf

Lambooy, T. (2010). Corporate due diligence as a tool to respect human rights. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 28(3), 404-448.

Mackie, J. (2021). *Due diligence in global value chains: Conceptualizing 'adverse environmental impact'*. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 30(3), 341–353. <https://doi.org/10.1111/reel.12406>

Martin-Ortega, O. (2014). Human rights due diligence for corporations: from voluntary standards to hard law at last?. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 32(1), 44-74.

Monereo Pérez, J. L., & Ortega Lozano, P. G. (2024). *La diligencia debida de las empresas en materia de “sostenibilidad”: Empresa responsable, trabajo formal y digno, derechos humanos y medio ambiente*. *Revista Crítica de Relaciones de Trabajo Laborum. Estudios Doctrinales*, (13), 37–97. <https://orcid.org/0000-0002-0230-6615>

Montgomery, A. W., Lyon, T. P., Barg, J. (2023). No End in Sight? A Greenwash Review and Research Agenda. *Journal of Business Ethics*, 182(4), 563–594. <https://doi.org/10.1177/10860266231168905>

OCDE (2018). Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/14922561-es>.

OCDE. (2021). Building More Resilient and Sustainable Global Value Chains Through Responsible Business Conduct. Disponible en <https://www.oecd.org/industry/digital-transformation-for-sustainable-value-chains.pdf>, consultado el 12 de junio de 2025.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2011). *Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”* (A/C/17/31). Consejo de Derechos Humanos.

Ortíz-Arce Vizcarro, S. (2024). Nuevos horizontes para la UE en la Directiva Due Diligence: derechos humanos, medio ambiente y rendición de cuentas corporativa en las cadenas de valor. *Revista Española de Empresas y Derechos Humanos*, (3)

Rodríguez, M., Ruiz, A. (2020). Turismo y desarrollo económico en Andalucía: análisis y perspectivas. *Revista de Turismo y Desarrollo Local*, 12(1), 45-62.

Ruggie, J. G. (2011). *Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar* (A/HRC/17/31). Naciones Unidas.

Ruggie, J. G. (2018). *Global governance and the emergence of the private sector in global regulation*. Cambridge University Press.

Velasco, A. (2024). *La ley alemana de debida diligencia: Cambio climático, energía y medio ambiente en la cadena de suministro y sus implicaciones ambientales para América Latina y el Caribe*. Friedrich-Ebert-Stiftung. Disponible en <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/21866-20250227.pdf>